



PROTECCIÓN EFECTIVA: TODAVÍA UNA ILUSIÓN PARA DEFENSORA MEXICANA EN PELIGRO

“A mí no me dejan vivir libre.”

Obtilia Eugenio Manuel



La defensora de los derechos de las personas indígenas Obtilia Eugenio Manuel es objeto de amenazas de muerte y de actos de intimidación desde 2005. Algunos de sus colegas han sido asesinados por su labor. A pesar de que su vida corre peligro, las autoridades no le han proporcionado una protección efectiva. Los defensores y defensoras de derechos humanos de México piden al gobierno que cumpla de una vez su promesa de adoptar e implementar un mecanismo de protección efectivo para todos los defensores en situación de riesgo.

Obtilia Eugenio Manuel es, desde hace tiempo, activista de los derechos de las personas indígenas. Es fundadora y presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) en el estado mexicano de Guerrero. Con más de 200 miembros activos, la OPIM gestiona proyectos de desarrollo económico y social a pequeña escala para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas Me'phaa. “Nos hemos organizado porque no tenemos medicinas [...] ni carreteras buenas para trasladar a nuestros familiares cuando se enferman. Nunca hay un médico en la comunidad”, dice esta defensora de 32 años. La organización también promueve las tradiciones y prácticas culturales de los Me'phaa, lo que incluye la educación bilingüe.

Como líder de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel ha acompañado a quienes han tenido la valentía de denunciar abusos cometidos por el Estado y por agentes no estatales. Ha ayudado a dos mujeres Me'phaa en su búsqueda de justicia tras ser violadas por soldados en 2002. Obtilia también ha denunciado el enjuiciamiento por motivos políticos de varios miembros de la OPIM, perseguidos debido a sus legítimas actividades en la organización. Cinco de ellos fueron detenidos el 17 de abril de 2008, cuatro de los cuales quedaron en libertad posteriormente. El preso de conciencia Raúl Hernández, defensor de derechos humanos, sigue en prisión cuando se redactan estas líneas.

Desde que se fundó la OPIM en 2002, Obtilia Eugenio Manuel ha sido objeto de numerosas amenazas, actos de intimidación y vigilancia. En varias ocasiones ha identificado a los agresores como partidarios de un cacique local. La gravedad y frecuencia de las amenazas hizo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instara en 2005 al Estado a que concediera medidas de protección a Obtilia. Pese a ello, los actos de intimidación han continuado sin cesar. En febrero de 2009 fueron asesinados Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, colegas de Obtilia, y esta recibió nuevas amenazas en marzo. Esta vez fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ordenó a las autoridades que la protegieran, pero la respuesta del Estado fue lenta e insuficiente. Las medidas de protección acordadas entre las autoridades y Obtilia Eugenio Manuel no se implementaron totalmente hasta diciembre de 2009, diez meses después de que fueran requeridas.

El 6 de marzo de 2010, Obtilia Eugenio Manuel recibió una amenaza de muerte por escrito en la oficina de la OPIM. La nota decía: “Obtilia, cálmate hija de tu chingada madre, ya no andes

denunciando en contra del gobierno. Ya sé que tú presentas las denuncias a todo nivel. No creas que eres de hierro, como quieras te atraviesan las balas. Nosotros estamos protegidos por el gobierno – federal, estatal y local. Ya estamos cerca de ti.” Ese mismo día fue seguida por un hombre. Obtilia se puso en contacto con las autoridades al día siguiente para pedir más protección. No obtuvo respuesta de las autoridades y, temiendo por su vida, decidió marcharse de su ciudad natal y ocultarse con su compañero y sus tres hijos. Las medidas de protección adicionales no se implementaron hasta el 29 de abril. Sin embargo, Obtilia y su familia siguen ocultos cuando se redactan estas líneas.

“Las medidas cautelares que el gobierno nos ha otorgado se han demorado mucho tiempo y hemos tenido que luchar mucho por ellas.”

Obtilia Eugenio Manuel



La defensa de los derechos humanos en México es una actividad peligrosa para la vida. Los ataques se ven agravados por el hecho de que las autoridades no proporcionan a los defensores medidas de protección efectivas y oportunas. En la inmensa mayoría de los casos, incluido el de Alba Cruz, las autoridades tampoco han investigado los ataques ni han hecho comparecer a sus responsables ante la justicia.

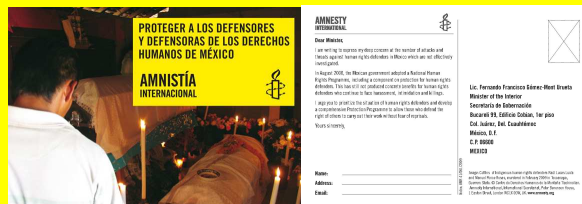
El Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 reconoce la necesidad de abordar la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos del país. Compromete al gobierno a establecer un mecanismo de protección para defensores en situación de riesgo y pide a la Procuraduría General de la República que adopte un protocolo específico para la investigación de este tipo de ataques. En febrero de 2009, México acordó de nuevo “establecer medidas estructurales” para abordar la cuestión en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Más recientemente, el 21 de enero de 2010, la Secretaría de Gobernación emitió una declaración en la que reiteró su compromiso de “trabajar conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil en el diseño y ejecución de un mecanismo para la protección de los periodistas y defensores de derechos humanos.” A pesar de estos compromisos, tanto el mecanismo de protección como el protocolo de investigación siguen siendo papel mojado.

EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DEBE APROBAR E IMPLANTAR UN MECANISMO DE PROTECCIÓN EFECTIVO Y COMPLETO PARA DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN SITUACIÓN DE RIESGO.

- El mecanismo deberá ser debatido y acordado con defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
- Deberá contar con recursos humanos, presupuestarios y logísticos suficientes para la aplicación efectiva y oportuna de medidas de protección en todo el país.
- Deberá contener instrucciones claras sobre cuándo y cómo se debe proporcionar protección.
- Deberá haber una coordinación y una rendición de cuentas efectivas entre las autoridades federales y las estatales para la aplicación de las medidas de protección.
- Deberá haber una evaluación y supervisión constantes de las medidas de protección concedidas y las medidas adoptadas para investigar los ataques.
- El secretario de Gobernación deberá garantizar que el mecanismo de protección y el protocolo de investigación sean congruentes con los principios de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU de 1998.

Datos de contacto del Secretario de Gobernación:

Lic. Fernando Gómez Mont Urueta
 Secretaría de Gobernación
 Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez
 Delegación Cuauhtémoc
 México D.F., C.P.06600 - MÉXICO
 Fax: (+52) 55 5093 3414
 Correo electrónico: secretario@segob.gob.mx
 Tratamiento: Estimado Señor Secretario



Puede descargar e imprimir esta tarjeta postal en:
<http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/054/2010/es>

Fotos © CDHM Tlachinollan (página 1) y Ricardo Ramírez Arriola (página 2).